

#10,00

ICONOS|12

~~FLACSO~~ - ~~Bibliotecas~~

Revista de FLACSO-Ecuador

No 12. noviembre, 2001

ISSN 13901249

Los artículos que se publican en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores, no reflejan necesariamente el pensamiento de **ICONOS**

Director de Flacso-Ecuador

Fernando Carrión

Consejo editorial

Felipe Burbano de Lara (Editor)

Edison Hurtado (Co-editor)

Franklin Ramírez

Alicia Torres

Mauro Cerbino

Eduardo Kingman

Producción:

FLACSO-Ecuador

Diseño e ilustraciones:

Antonio Mena

Impresión:

Edimpres S.A.

FLACSO-Ecuador

Ulpiano Páez N 19-26 y Av. Patria

Teléfonos: 2232-029/ 030 /031

Fax: 2566-139

E-mail: fburbano@flacso.org.ec

ehurtado@flacso.org.ec

FLACSO - Bibliotecas

Indice

Coyuntura

6

“Choque de civilizaciones”,

fundamentalismo islámico y geopolítica de la nueva Guerra Fría

Marc Saint-Upéry



13

La reforma fiscal deja intacto el problema del endeudamiento externo

Fander Falconí,

Hugo Jácome

Dossier

22

El círculo vicioso de la transición:

de la democracia formal a la poliarquía

Pablo Andrade A.

33

Una democracia en busca de actores:

reflexiones sobre el proceso político ecuatoriano a partir de la transición

Francisco Sánchez López

47

La crisis política en Colombia

Pedro Santana Rodríguez

54

Reconstruyendo la democracia en Perú: crisis y transición en la caída de Fujimori

Carmen Rosa Balbi y

David Scott Palmer

Debate

66

“Hay que romper los paradigmas que hemos construido”

Discurso de Fernando Henrique Cardoso

en la recepción del Doctorado Honoris Causa otorgado por FLACSO



72

Apuntes sobre modernidad, reflexividad y política

Más allá de la democracia dialógica.

Natalia Catalina León G.

Diálogo

88

Diálogo con Axel Ramírez: **Las fronteras de la antropología y la antropología de las fronteras**

Mauro Cerbino

Temas

100

La Bruja, la Tunda y la Mula:

el diablo y la hembra en las construcciones de la resistencia afro-ecuatoriana

Paloma Fernández Rasines

108

Como insulina al diabético:

la selección de fútbol a la nación en el Ecuador de los noventa

Franklin Ramírez G.

Jacques Ramírez G.

Frontera

120

Argentina: anatomía de una crisis

Juan Jacobo Velasco

126

**La convertibilidad en Argentina:
lecciones de una experiencia**

Alfredo Calcagno,

Sandra Manuelito y Daniel Titelman

142

Reseñas

148

Sugerencias bibliográficas

151

Contenido ICONOS 11



Reconstruyendo la democracia en Perú: crisis y transición en la caída de Fujimori

Carmen Rosa Balbi y
David Scott Palmer*

Se da por sentado que hoy por hoy la democracia en Latinoamérica es entendida como elecciones regulares, libres, justas y con respeto por sus resultados. Dada la historia de golpes de estado, caudillos y regímenes no electos en la región, afirmar esto no es ninguna proeza. Durante los años 30 y 40, cuarenta y nueve golpes de estado se llevaron a cabo en dieciséis de los veinte países de América Central y del Sur; mientras que, en los ochenta, nueve golpes se sucedieron en cinco países. Además, el acceso de la oposición al poder político a través de las elecciones se ha vuelto la norma durante los últimos veinte años. En las subsiguientes elecciones nacionales desde 1980 en casi los dos tercios de América del Sur, el candidato que ganó la presidencia ha sido de un grupo político o partido diferente al titular. Aunque ha habido múltiples desafíos y algunos con soluciones muy imaginativas en las sucesiones presidenciales, uno puede concluir que la democracia electoral ha apoyado el hecho y se ha vuelto una rutina en la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, ello no ha sido así en Perú. Alberto Fujimori, presidente de ese país entre 1990

y 2000, vio en las elecciones un terreno sujeto a la manipulación con el fin de mantener el control y proporcionar una pátina de legitimidad, que contribuyó a una política progresivamente personalista y autoritaria en el curso de los años noventa. Después de la reelección fundamentalmente deficiente de Fujimori en mayo del 2000, la mayoría de los observadores parecía resignarse a que el país tendría por lo menos cinco más años de lo mismo. Sin embargo, en el curso de solo nueve semanas, entre el 14 de septiembre y el 22 de noviembre, la maquiavélica estructura política construida durante la década se vino abajo.

En este momento, el pasado está siendo reemplazado por un cuadro de líderes democráticos peruanos. Éstos han empezado a reconstruir una estructura con personas seleccionadas sobre la base del mérito y con procedimientos más abiertos y transparentes. La desacreditada política democrática de interacción partidaria y el forjamiento de soluciones de compromiso se ponen de moda. La fe de las personas en el estado se restaura. ¿Cómo explicamos lo que pasó y cuáles son las perspectivas para el éxito?

La disminución del autoritarismo

Los orígenes de la crisis política más reciente del Perú pueden encontrarse en el fracaso sucesivo de dos presidentes elegidos que provenían de partidos establecidos para gobernar eficazmente. El primero fue Fernando Belaúnde Terry del partido Acción Popular (AP), quien gobernó entre 1980 y 1985; el segundo, Alan García Pérez de la Alian-

* Carmen Rosa Balbi es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría de la Universidad Católica de Lima. David Scott Palmer es profesor del Departamento de Relaciones Latinoamericanas de la Universidad de Boston y fue observador de la Organización de Estados Americanos durante las elecciones presidenciales peruanas de abril de 2000.

za Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien gobernó entre 1985 y 1990. En 1990 los peruanos se alejaron de los partidos y los políticos para elegir a un neófito atractivo, Alberto Fujimori. Como el gobierno de Fujimori enfrentó exitosamente la hiperinflación, la violencia guerrillera generalizada y el colapso económico, obtuvo y mantuvo el apoyo popular, incluso para el autogolpe de 1992.

La aprobación pública se incrementó con el crecimiento económico renovado, con nuevos programas de gobierno para los pobres -que redujeron relativamente la pobreza extrema- y con un progreso sustantivo en la restauración de la infraestructura de la nación. Ello se tradujo en un voto ajustadamente mayoritario que recibió el gobierno en 1993 para la aprobación de un referéndum, mediante el cual se eligió un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva Constitución que instalaba la reelección en el Perú. Este apoyo mayoritario también se observó en 1995.

Así, determinados logros gubernamentales consiguieron que los ciudadanos prestaran menor atención a la progresiva corrosión de los procedimientos democráticos, particularmente después de la resonante victoria electoral de Fujimori en 1995. Una amnistía general perdonó al ejército y a la policía de los abusos contra los derechos humanos. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), originalmente establecido para luchar contra la subversión, se involucró crecientemente con las actividades políticas domésticas para apoyar al gobierno y socavar a la oposición. Los medios de comunicación fueron sistemáticamente intimidados -la televisión en particular- para que a fines de los años noventa no quedara casi ninguna estación independiente. Los jueces estaban sujetos al escrutinio íntimo y a menudo eran sumariamente removidos si sus opiniones discordaban con la posición oficial.

En materia de elección, los principales organismos de vigilancia electoral, el Consejo Electoral Nacional y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, fueron puestos gradualmente en manos de partidarios gubernamentales. Un único distrito nacional para la elección al Congreso fue mantenido, minando la representación y la orga-

nización política local. Los gobiernos municipales fueron despojados de muchos de sus fondos locales y se volvieron más dependientes de las asignaciones de recursos del gobierno central. Un millón doscientas mil firmas, más de las constitucionalmente requeridas, apoyaron una iniciativa para determinar si el presidente podría presentar su candidatura para un tercer período consecutivo; pero el Congreso, inconstitucionalmente, frustró el esfuerzo para sostener un referéndum.

En suma, el gobierno usó diestramente la aversión popular contra los partidos y el viejo estilo de los líderes políticos para construir un aparato electoral estatal que solo era democrático en el nombre. Aunque la oposición a tales maquinaciones oficiales existió y tendió a crecer, el gobierno tuvo éxito en forzar la voluntad en cada oportunidad.

Entregado a la tentación

El inicio del colapso del presidente Fujimori se originó con su decisión, a fines de diciembre de 1999, de postular a un tercer período. Si él hubiera estado deseoso de seguir su propia Constitución de 1993, que limitó al jefe ejecutivo a dos períodos sucesivos, es más que probable que hubiera sido recordado como el presidente que salvó al Perú (y habría sido elegible nuevamente en el 2005). Pero la maquinaria estaba asentada, ningún sucesor había sido preparado y los intereses en juego eran demasiado grandes.

Una vez que la decisión fue tomada, un formidable aparato de apoyo se dedicó a contrarrestar las encuestas, que evidenciaban una significativa desaprobación popular para un tercer período y el apoyo extendido de otros candidatos. El popular y exitoso alcalde de Lima, Alberto Andrade, fue el primero en sentir los efectos de la campaña de hostigamiento del gobierno. Los ataques fueron montados en periódicos sensacionalistas financiados por el SIN, así como en las entonces estaciones de televisión nacional subordinadas. El partido Somos Perú de Andrade no pudo comprar publicidad en la televisión y sus mítines fueron interrumpidos a menudo por selectivos cortes de corriente de electricidad o bien fueron desviados a

localizaciones incorrectas. Como resultado de ello, su popularidad entre enero y marzo cayó notoriamente de un 30 a un 10 por ciento. La campaña del antiguo director del Instituto Peruano de Seguridad Social, Luis Castañeda Lossio, y su grupo, el Partido de Solidaridad Nacional, estuvo sujeta al mismo tratamiento, con similares resultados en las encuestas.

Cuando ataques semejantes empezaron en marzo contra un tercer contendor, Alejandro Toledo y su partido, Perú Posible, la ciudadanía estaba alertada de los sucios trucos oficiales. Como resultado, la campaña de Toledo retuvo un apoyo significativo, el cual llevó adelante hasta la elección del 9 de abril. Una "oposición flotante", que se movió de un candidato a otro en el curso de la campaña y que terminó apoyando a Toledo, señalaba la ausencia de adherencias a los partidos políticos, pero también la sustancial corrosión del apoyo de Fujimori. Sin duda, no ayudaron a la campaña del presidente las revelaciones producidas en marzo, cuando se descubrió que un millón de las firmas registradas por su nuevo partido, Perú 2000, habían sido falsificadas. Aunque los acusadores se convirtieron en acusados y todo el proceso se sacó de la vista pública, el asunto dejó un sabor amargo en las bocas de los ciudadanos. Cuando la campaña por la elección se caldeaba, las encuestas demostraron una competencia cercana y la fuerte posibilidad de una segunda vuelta, ya que ningún candidato recibiría más de la mitad de los votos válidos.

En medio de las preocupaciones por la existencia de condiciones para una elección libre y justa en el Perú, los actores extranjeros -especialmente la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de los Estados Unidos- así como las organizaciones no gubernamentales aceptaron la invitación del gobierno peruano para enviar misiones de observación de la elección con el fin de contribuir a asegurar mayor honestidad y transparencia. Entre enero y marzo, el Centro Carter, el Instituto Democrático Nacional (IDN), la Unión Europea (UE) y la OEA estaban de acuerdo en enviar a los observadores.

A estos grupos se sumaron otras organizaciones de observadores locales como Transparencia, que se instalaron a lo largo y ancho del país para

observar todos los aspectos de las elecciones del 7 de abril. Esto incluía el establecimiento de centros de votación, el transporte de los votos y la observación del proceso desarrollado a lo largo del día, incluyendo la votación y el conteo. También realizaron su así llamado "conteo rápido", sobre la base de una muestra seleccionada, para así registrar los votos locales y supervisar la transmisión de los resultados a los centros regionales y nacionales. Más de siete mil voluntarios especializados realizaron estas tareas, la mayoría de ellos de Transparencia.

Con más de 1800 distritos políticos, fueron inevitables algunas irregularidades en la emisión de los votos. Sin embargo, los problemas más serios vinieron con la transmisión de los resultados oficiales computarizados a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Lima. Ocurrieron retrasos inesperados y el conteo rápido oficial que había sido prometido por esta institución fue cancelado a último minuto. Hay que agregar que desde fuera los observadores no podían confirmar la veracidad independientemente del proceso de transmisión, debido a la naturaleza del programa informático usado. Iban creciendo las sospechas de que el aparato gubernamental podría estar manipulando los resultados para asegurar la victoria.

Para aumentar más las sospechas, a los pocos minutos de cerrados los locales de votación, fueron anunciados los resultados de encuestas a boca de urna realizados por diferentes empresas encuestadoras y en las que el candidato de la oposición, Alejandro Toledo, aparecía vencedor por 3 a 6 puntos porcentuales, aunque le faltaban votos para obtener la mayoría en primera vuelta. En pocas horas, muestras más exactas de votos reales invirtieron esta proyección; aunque mostraban al presidente Fujimori igualmente con menos del total necesario para una victoria en primera vuelta.

Transparencia era una de las organizaciones involucradas en este proceso de conteo rápido. Las cifras de Transparencia se juzgaron creíbles, porque sus proyecciones en las elecciones de 1995 habían sido casi idénticas a los resultados oficiales finales y porque mayoritariamente era una organización considerada independiente. Con las noticias de los resultados a la salida de la votación,



*Los orígenes de la reciente crisis política de Perú
pueden encontrarse en el fracaso sucesivo de dos presidentes
que provenían de partidos establecidos: Fernando Belaúnde y Alan García.
Los logros de Fujimori opacaron la progresiva corrosión
de los procedimientos democráticos*

muchos de quienes habrían optado por Toledo se precipitaron a las calles y alentaron a su candidato a marchar al palacio presidencial para celebrar y para protestar por lo que ellos consideraban un fraude oficial. Hubo cierta violencia en las protestas, por las cuales el gobierno responsabilizó inmediatamente a Toledo.

Tan importante como las demostraciones de desconfianza fueron las publicaciones periódicas de resultados oficiales parciales, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, durante las siguientes 36 horas, las cuales ratificaban que los opositores al gobierno tenían razón de estar preocupados: cada anuncio mostraba a Fujimori más cerca de la mayoría simple necesaria para una victoria en primera vuelta.

Durante esos días críticos, las protestas pacíficas de los ciudadanos crecieron dramáticamente hasta llenar las calles y plazas de Lima y de muchas ciudades provincianas. Todos los candidatos presidenciales de la oposición unieron fuerzas con Toledo en un despliegue sin precedentes de solidaridad pública. Cuando a las 13h00 del 11 de abril anunciaron que Fujimori estaba a menos de dos décimas de un punto porcentual para su victoria, en medio de primicias de que en el próximo informe, a las 7:00 p.m., lo pondría en la cima, la comunidad internacional también se movilizó. Con el resultado del conteo rápido, sus fuerzas tomaron posiciones contra estas maquinaciones oficiales. De otro lado, en el curso de la tarde, el Centro Cárter, el IND, la UE, la OEA, el embajador de Estados Unidos en Perú y la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Madeleine Albright hicieron declaraciones públicas enérgicas y claras en el sentido de que, dada la información alternativa disponible, este resultado sería inaceptable.

Esta combinación de intensa presión nacional e internacional se mostró abrumadora: el gobierno comprendió el mensaje. Los resultados finales le dieron 49.8 por ciento de los votos a Fujimori y 40.3 por ciento a Toledo. Empezaron los preparativos para sostener una segunda ronda de votación el 28 de mayo. A pesar de que el gobierno aseguró que se realizaría una segunda ronda más transparente, en múltiples reuniones con la oposición -patrocinadas por la OEA- incumplió sus promesas. El aspecto crítico era la insistencia de la OEA en que el gobierno instale un nuevo programa de computación para el conteo de votos, que permitiría la confirmación de la exactitud del proceso en forma independiente. No se pudo alcanzar un acuerdo en medio de aplazamientos para instalar y probar el programa. El 17 de mayo, el director de la Misión de Observación Electoral de la OEA, embajador Eduardo Stein de Guatemala, presentó un informe oficial donde señalaba que "técnicamente resultaba imposible supervisar el sistema de Computo Electoral". Todas las misiones de observación se retiraron. Al día siguiente, Toledo, con el informe en mano, se retiró de la segunda vuelta, dejando a Fujimori como único candidato.

Una pírrica victoria electoral

No fue sorpresa para nadie que el presidente Fujimori ganara la segunda vuelta el 28 de mayo, esta vez sólo con el 51 por ciento de todo los votos emitidos. Los votos viciados, en blanco o marcados en favor de Toledo supuestamente compensaron el balance. Este resultado tuvo como efecto un gobierno de dudosa legitimidad, tanto nacional como internacional.



La salida y la expulsión de Montesinos a causa de una de sus propias creaciones fue la punta de la madeja que desenredó el tejido entero del régimen. Solo ahora se manifiestan con claridad la magnitud y la penetrabilidad de la corrupción en los gobiernos de Fujimori

Fujimori y sus partidarios aún parecían estar firmes en los cargos. Triunfaron diplomáticamente en la reunión de la OEA de junio en Windsor, Ontario. Con el apoyo de Brasil y México, contrarrestaron los esfuerzos para invocar la resolución 1080 y, a cambio, aceptaron una misión de OEA en Perú para trabajar medidas de democratización en un tiempo indeterminado¹. Los Estados Unidos, que había buscado la aplicación de la resolución 1080, aceptaron esta suavizada iniciativa y lanzaron críticas a lo que era la tercera administración de Fujimori.

Además, aunque los partidos de oposición ganaron una mayoría parlamentaria en las elecciones del 7 de abril (68 de 120) el Congreso, debido a la debilidad del sistema de partidos, pasó a control del gobierno gracias a las deserciones ocurridas a mediados de julio durante la elección de la Mesa Directiva (70 a 50). Además, en una ceremonia de preinauguración atípica, destinada a socavar a los antagonistas al régimen, el ejército había declarado formal y claramente su apoyo por la nueva presidencia de Fujimori. El gobierno, evocando imágenes antiguas de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, presentó la estrategia de la oposición de realizar movilizaciones populares como una situación que requería mano dura. Los medios de comunicación controlados por el gobierno también presentaron a la oposición como desanimada, dividida y desorganizada.

Pero las apariencias engañaban. Las manipulaciones del conteo de votos del 9 de abril y la farsa de la segunda vuelta no sólo produjeron fuertes protestas y presiones internacionales, también

motivaron a un gran número de peruanos a protestar contra el gobierno. La ceremonia de apertura del tercer mandato de Fujimori del 28 de julio provocó una marcha pacífica de masas en Lima y provincias, que fue desfigurada por actos de violencia y un incendio que ahora ha quedado en evidencia fue organizado por el SIN. Como resultado, el jefe del ejecutivo empezó su undécimo año consecutivo en la oficina bajo una nube de sospechas públicas y de desconfianza.

El principio del fin de Montesinos

El punto crucial en el destino del presidente Fujimori fue el 21 de agosto, con la revelación de la existencia una red de tráfico de armas, manejada por agentes gubernamentales corruptos, cuyo destino eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El tráfico involucraba armas compradas por el ejército peruano a Jordania a iniciativa de oficiales militares peruanos y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con Vladimiro Montesinos a la cabeza. El escándalo provocó el asombro y el escepticismo público, lo que contribuyó a que la opinión popular se galvanizara contra el gobierno. La decisión de Estados Unidos de cortar los vínculos de sus servicios de inteligencia con Montesinos probablemente también estuvo influenciada por este escándalo.

El presidente Fujimori intentó mantener el mando con tardías contestaciones a numerosas preocupaciones internacionales y de la oposición. El gobierno estaba de acuerdo en mantener las negociaciones con la oposición a través de la OEA para la iniciativa de redemocratization. Concedió un nuevo juicio para la ciudadana americana Lori Berenson, que había sido sentenciada a cadena

¹ La resolución 1080 refleja el acuerdo histórico alcanzado entre los estados miembros de OEA en 1991, por el cual se puede decidir las sancionadoras cuando se amenaza la democracia en un país miembro.

perpetua por una corte militar en 1995 por su supuesta complicidad con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Restauró la ciudadanía peruana que había despojado al empresario Baruch Ivcher y de este modo se desbloqueó lo que formalmente permitiría a Ivcher recobrar la conducción de una de sus propiedades: Frecuencia Latina, la principal estación de televisión opositora. Asimismo, nombró a un procurador público independiente, José Ugaz, para investigar las actividades de Montesinos. Estos esfuerzos fueron insuficientes y tardíos, dada la creciente indignación pública por las maquinaciones políticas oficiales y la corrupción en el ejército.

El evento importante en este dramático repunte del rechazo político fue la aparición de un video del SIN hecho público el 14 de septiembre en una estación de televisión por cable que había permanecido independiente, Canal N. El video mostraba a Luis Alberto Kouri, un legislador elegido por la oposición, recibiendo quince mil dólares en efectivo a cambio de pasarse al partido gubernamental. El video desarmó la cubierta de fachada democrática que había construido el gobierno de Fujimori. Los rumores que circulaban durante las últimas semanas en Lima, que sostenían que se estaban comprando legisladores, fueron definitivamente confirmados. La eminencia gris del gobierno, Vladimiro Montesinos, se reveló en el video como un personaje corrupto -que muchos habían creído que era- entregando personalmente el soborno. El gobierno no podría disimular esta patente exhibición de malversación oficial.

Esta difusión de la cinta puso de manifiesto la total ilegitimidad de la mayoría que el gobierno había formado en el Congreso para gobernar "legalmente" por los próximos cinco años. El presidente Fujimori comprendió la gravedad de la situación inmediatamente. Primero intentó salvarse a sí mismo y a su gobierno obligando a Montesinos a que renunciara. Fracasó. Dos días después, en los cuales el presidente y su asesor de inteligencia se habían enfrascado en una lucha interna de poder, Fujimori apareció en la televisión con el sorprendente anuncio de que él acortaría su período y convocaría elecciones, en las que no sería candidato, para el próximo año. Con esta estrate-

gia, Fujimori esperaba forzar la salida de Montesinos, salvar a su gobierno y presidir un proceso de la transición bajo su último mandato. El Congreso rápidamente aprobó los cambios constitucionales exigidos para hacer esto posible y estableció las elecciones para el 8 de abril de 2001.

Después de algunos días de incertidumbre, Fujimori parecía obtener ventaja. Con la ayuda del embajador de Estados Unidos en el Perú, John Hamilton, y del secretario general de la OEA, César Gaviria, logró que Montesinos partiera hacia Panamá, para lo cual convenció a las renuentes autoridades panameñas de que era probable un golpe de Estado en el Perú si Montesinos se quedaba en territorio peruano. Después de que Fujimori realizara una serie de visitas apresuradas a varias comandancias militares, las Fuerzas Armadas anunciaron su apoyo al presidente. El congreso, por ciento y un votos contra uno, aprobó disolver el SIN. La oposición trabajó un cronograma electoral con el gobierno a través de una misión de OEA conducida por el embajador Eduardo Latorre, de la República Dominicana. El presidente Fujimori viajó brevemente a Washington, donde se encontró con la ministra de Relaciones Exteriores Madeleine Albright, el consejero de la seguridad nacional Sandy Berger y el secretario general de la OEA César Gaviria, entre otros funcionarios, con el propósito de consolidar su apoyo. El presidente aparentemente regresaba al Perú fortalecido en el cargo.

Sin embargo, el 13 de octubre, la Mesa Directiva del Congreso, todavía en las manos de leales a Fujimori, alargó las sesiones hasta el fin de mes, con lo que violaba uno de los acuerdos patrocinados por la OEA. El gobierno también presentó una propuesta de amnistía general para proteger al ejército y el personal civil, como requisito previo para llevar a cabo la transición electoral. Una vez más el gobierno parecía estar intentando maniobrar las formas de salida de la crisis imponiendo sus propias condiciones.

A estas alturas, la oposición, indignada, abandonó la mesa de diálogo. El país se unió alrededor de ella ante las evidencias de que eran los jefes militares quienes exigían la amnistía a fin de protegerse ante cargos de corrupción. La indignación pública aumentó cuando se supo que Montesinos tam-

bién presionaba al Congreso a través de la vía telefónica desde Panamá. Las demandas para un cambio inmediato en la Mesa Directiva del Congreso y la renuncia de Fujimori crecieron diariamente.

Seilando el destino de Fujimori, paso uno

La autoridad temporal de Fujimori fue desmoronada por dos eventos importantes. El primero era el retorno "secreto" de Montesinos al Perú el 23 de octubre. El mismo presidente lideró una muy pública y casi risible búsqueda para atrapar a su antiguo confidente, aunque ella parecía estar diseñada más para demostrar quién mandaba y simular una ruptura con su antiguo asesor, que para efectuar un arresto. La mayoría del público (73% según la empresa Encuestadora Apoyo) no creía que el presidente actuaba seriamente (la prensa peruana reveló posteriormente que el presidente Fujimori había estado en regular contacto por teléfono con Montesinos después de su retorno a Perú, lo que confirmaba así las sospechas del público). La autoridad de Fujimori se debilitó todavía más por la renuncia de su primer vicepresidente, Francisco Tudela, en protesta por el retorno de Montesinos.

A fines de octubre, probablemente con la ayuda de Estados Unidos, las autoridades suizas revelaron que Montesinos poseía cuentas secretas de bancos suizos por al menos 48 millones de dólares, lo que lo desacreditó totalmente e hizo improbable que pudiera conseguir apoyo entre sus anteriores aliados como para recobrar influencia. Sin embargo, Montesinos continuó fugitivo; mientras eludía la captura, constituía una amenaza al plan de Fujimori de vigilar y controlar la transición política.

Simbolizando las divisiones en el Ejército por el retorno de Montesinos, el capitán Ollanta Humala Tasso, al mando de cerca de sesenta hombres, se rebeló en Arequipa el 29 de octubre, con el propósito de denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas. Quijotesca como era su protesta, muchos peruanos lo ovacionaron como un héroe. Fujimori, cada vez más vacilante, estaba siendo además minado por las memorias del hermano del colombiano Pablo Escobar -el antiguo capo

del narcotráfico- que fueron publicadas en Colombia el 11 de noviembre por la revista *Cambio*. Según su testimonio, Montesinos había aceptado en 1989 un millón de dólares del narcotraficante para financiar la primera campaña presidencial de Fujimori, una acusación que Susana Higuchi, ex esposa del presidente Fujimori y encargada de la finanzas de su primera campaña, ha negado.

La siempre fecunda y todavía frecuentemente acertada fábrica de rumores de Lima comenzó a sugerir que Fujimori terminaría por renunciar. Se rumoreaba incluso que el embajador de Estados Unidos en el Perú, John Hamilton, se había reunido con el presidente para disuadirlo de tomar esta decisión. El 15 de noviembre, Fujimori viajó a la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico en Brunei, al parecer seguro de que podría continuar jugando el papel de estadista internacional.

Sellando el destino de Fujimori, paso dos

El domingo 19 de Noviembre, anunciaba desde el Japón su renuncia a la presidencia de la República. Días después ocurrió el segundo evento galvanizante. La oposición, ahora engrosada por las defecciones de muchos miembros de la mayoría parlamentaria fujimorista debido a los escándalos, obtuvo los votos que le permitieron derrocar a la Mesa Directiva del Congreso, hasta entonces en poder de Martha Hildebrandt, líder congresal del oficialismo. Valentín Paniagua, político de viejo cuño, militante de Acción Popular y uno de los pocos parlamentarios provenientes de un partido tradicional, era la opción que había surgido del acuerdo general de la oposición para reemplazar a Hildebrandt en la presidencia del Congreso.

En sólo nueve semanas se desmoronó la maquiavélica estructura política construida durante una década

En los inicios de los años noventa, el presidente Fujimori enfrentó una legislatura de oposición controlada. En 1992, en lugar de continuar con la política de negociación propia de la democracia,



Aunque quedan aún muchos problemas que deben ser reconocidos y superados, Perú cierra una etapa y se abre camino hacia una democracia abierta y pluralista. Se ha restaurando la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral transparente como vehículo para la renovación y el cambio

Fujimori llevó a cabo el autogolpe de estado, a través del cual suspendió el Congreso, la magistratura y la Constitución de 1979.

En el 2000, antes de transar con la oposición, escogió renunciar. Su salida ignominiosa fue tan dramática como su victoria política en 1990. Cuando se enfrentó con la perspectiva de ser de nuevo un político, abandonó el combate y dejó colgados a sus partidarios. Cuando él ya no pudo maniobrar las reglas del juego político, decidió recoger el balón e irse a lo que consideraba su patria, a Japón.

Un segundo motivo para que Fujimori escogiera la renuncia y el autoexilio fue el deseo de escapar del torrente de acusaciones que lo señalaban a él como un corrupto. Muchos no podían creer que hubiera podido presidir el gobierno por más de diez años sin saber que Montesinos se dedicaba a actividades ilícitas o sin haber estado envuelto en esos casos. Cuando el nuevo Procurador comenzó a indagar en las imputaciones contra Fujimori y la magistratura, el presidente dejó el Perú para evitar ser investigado². El Congreso, indignado, optó por no aceptar la renuncia que Fujimori había enviado a través de un fax y el 21 de noviembre declaró, por sesenta y dos votos contra nueve, la vacancia de la Presidencia por incapacidad moral de su titular, una decisión permitida por la Constitución de Perú de 1993. Al día siguiente, después de aceptar la renuncia del primer vicepresidente Francisco Tudela y del segundo vicepresidente Ricardo Márquez, el presidente del Congreso asumió la Presidencia de la República

² Se reveló que los padres de Alberto Fujimori lo habían registrado como súbdito japonés en el consulado japonés en Lima. Esto significó que, bajo la ley japonesa, él podría permanecer en Japón el tiempo que deseara y que no podría ser extraditado.

siguiendo el procedimiento constitucional. Valentín Paniagua juramentó como presidente interino hasta el 28 de julio de 2001.

Surgimiento de la ocasión

Aunque Estados Unidos había expresado preocupación por el caos que se suscitaría en el Perú si Fujimori dejaba el cargo, los primeros indicios indicaban que el gobierno de transición se había puesto a la altura de las circunstancias. El nuevo gabinete incluía figuras respetadas por el espectro político. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores. Diego García Sayán, por mucho tiempo cabeza de la Comisión Andina de Juristas, ocupó el Ministerio de Justicia. Javier Silva Ruete, ministro de finanzas durante los últimos tres años del régimen militar que gobernó Perú entre 1968 y 1980, y quién restauró el orden económico durante su gestión, asumió esa cartera una vez más.

Uno de los primeros actos del Presidente Paniagua fue restaurar en sus puestos a los tres miembros del Tribunal Constitucional que habían sido despedidos en 1997 por decretar que una tercera presidencia de Fujimori era inconstitucional. También retiró de sus puestos a importantes seguidores de Montesinos en las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales se hallaban en la línea de carrera para asumir altos mandos en enero y a quienes se reemplazó por oficiales institucionalistas. Los retiros incluyeron a dieciséis generales del Ejército, catorce generales de la Fuerza Aérea y treinta y dos generales de la Policía, así como otros ciento treinta y ocho funcionarios.

Se estableció una unidad policial especial para

capturar a Montesinos, encabezada por el general Antonio Ketín Vidal, agente de policía que condujo el grupo de la inteligencia que capturó al líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Reynoso en septiembre de 1992³. Adicionalmente, se disolvió el sistema de jueces temporales, así como la vigilancia presidencial de comisiones judiciales establecida bajo el gobierno de Fujimori en 1992 y 1993 para influir en las decisiones legales.

Se nombraron nuevas autoridades políticamente independientes en las comisiones electorales nacionales. Se decidió que los casos de 117 diplomáticos de carrera, sumariamente despedidos por el presidente Fujimori en diciembre de 1992, habrían de ser revisados para evaluar su reincorporación. También se anunció la investigación del destino de unos 9 mil millones de dólares de ingreso gubernamental por privatizaciones durante los años de Fujimori: cientos de millones de dólares pueden haber sido extraídos a través de cuentas ilícitas en bancos fuera del país.

Estas significativas iniciativas del nuevo gobierno en tan corto tiempo hacen pensar en su determinación para deshacer los abusos y excesos de los gobiernos de Fujimori. El presidente interino Valentín Paniagua parece personificar las cualidades de un verdadero político: un conciliador que trabaja por encontrar puntos de acuerdo entre diferentes perspectivas, que surge para encontrar exactamente lo que necesita el Perú. Una especie en peligro fue devuelta a la vida: la relegitimización del pluralismo democrático como forma de gobierno. Paniagua y su gobierno han sido ayudados por un flujo de apoyo popular y la ciudadanía parece empezar a recobrar su confianza en el Estado.

Los desafíos por delante

Los desafíos abundaron en las arenas política y económica. En la política, un obstáculo crítico fue la transformación de los procesos, mecanis-

mos e instituciones electorales, de manipulados y opacos, a autónomos y transparentes, para las elecciones del 8 de abril. El organismo electoral oficial, el Jurado Nacional de Elecciones, y la entidad de conteo de votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estaban seriamente comprometidas en las elecciones de 2000 y requieren un completo reacondicionamiento.

Habría que señalar que a pesar de que la tendencia hacia un derrumbamiento virtual de partidos políticos ocurrida en los últimos años es un desafío a largo plazo, una recomposición orgánica para lo cual deben encontrarse inmediatamente los mecanismos que permitan empezar la revitalización del proceso.

Afortunadamente, en la arena política, la Misión Permanente de Alto Nivel de la OEA para Perú, establecida en junio, contaba con un documento para impulsar la restauración de las instituciones democráticas antes de que las crisis impulsaran la salida de Fujimori. En junio y julio, el gobierno, la oposición y los representantes de la sociedad civil habían aceptado veintinueve medidas específicas en cinco áreas amplias: 1) la administración de reforma de justicia; 2) la libertad de expresión y medios de comunicación; 3) la reforma electoral; 4) la responsabilidad gubernamental; y 5) el mando civil sobre las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. El gobierno interino, con el fuerte apoyo popular, ha avanzado sustantivamente en cada una de estas áreas.

Una campaña vigorosa, constructiva y abierta por primera vez en una década, dio como ganadores de la primera vuelta a los candidatos Alejandro Toledo y Alan García, quedando fuera de carrera la candidata Lourdes Flores Nano. Alejandro Toledo, virtual presidente electoral, gana la segunda vuelta frente a Alan García (53.08% frente a 46.92%).

Quedan abiertos múltiples desafíos políticos, uno de ellos es el referido a uno de los logros de los gobiernos de Fujimori: la desarticulación de Sendero Luminoso y la revitalización de las organizaciones que fueron llenando los espacios que eran ocupados por éste o que fueron abandonados por las administraciones anteriores y que responden a las necesidades de los sectores más pobres de la población. Puesto que algunas de estas iniciati-

3 A mediados de diciembre se anunció que Montesinos había escapado de Perú el 29 de octubre en velero, con la ayuda de altos oficiales militares, incluso del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general José Villanueva Ruesta, quien fue arrestado cuando intentaba huir hacia Ecuador.

vas, particularmente los Comedores Populares y los programas del Vaso de Leche, fueron progresivamente eje de las políticas clientelistas y paternalistas diseñadas para generar los votos en favor de Fujimori, han debido ser sujetas por el Gobierno Provisional a una cuidadosa evaluación y desmontaje del aparato construido al interior de ellas por el ex oficialismo. Las señales iniciales sugieren que las organizaciones más eficientes, como el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) en materia de lucha contra la extrema pobreza, se mantendrán enfatizando ahora una indispensable concertación interinstitucional que priorice a los gobiernos locales, con el propósito de estimular la efectiva y largamente esperada descentralización gubernamental.

Los problemas económicos pueden ser más difíciles manejar. El Perú está en recesión. La economía se ha erosionado en algo más de 10 por ciento en el último año y medio. La deuda exterior ha aumentado a 28 mil millones de dólares. El déficit gubernamental podría alcanzar el 3 por ciento, si bien según las cláusulas del Fondo Monetario Internacional no deberían exceder el 1.5 por ciento. En este período de incertidumbre, la comunidad internacional probablemente no realizará compromisos económicos hasta que se elija un nuevo gobierno. No serán tiempos económicos fáciles para la gran mayoría de la población peruana, lo que podría afectar las perspectivas de una política de transición exitosa.

Un tiempo de promesa

La “democracia autoritaria” del Perú, una vez puesta a prueba, se derrumbó rápidamente. Los antecedentes se encuentran en la ascendente protesta popular sobre los intentos de abierta manipulación del Gobierno saliente para asegurar una tercera elección sucesiva del presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la causa directa e inmediata fue un creciente consenso popular en que el régimen se mantenía sobre la base de una estrategia de corrupción diseñada por Montesinos, con la anuencia o la complicidad del propio Fujimori. Esta estrategia estuvo orientada a involucrar amplios sectores de las Fuerzas Armadas, del Poder

Judicial y de los medios de comunicación, con el SIN como el organismo rector del poder real. Como el procurador José Ugaz señaló el 12 de diciembre: “uno no puede hablar de corrupción individual en el gobierno pasado, sino de un aparato delictivo que involucró a todo el sector público.

Solo ahora se ha puesto claro la magnitud y la profundidad de la corrupción en los gobiernos de Fujimori. La salida y la expulsión de Montesinos a causa de una de sus propias creaciones fue la punta de la madeja que desenredó el tejido entero del régimen. Fujimori ha intentado, en las entrevistas concedidas desde su partida oficial, describirse como alejado de esta penetrante corrupción, todo se indica, sin éxito ni credibilidad.

En vez de quedarse en el Perú para ejercer su defensa, Fujimori se estableció en el Japón y ha usado su, por mucho tiempo oculta, carta de triunfo, la ciudadanía japonesa, a fin de asegurarse que no prospere la extradición al Perú por sus transgresiones. Esta es la última desgracia para un presidente alguna vez aclamado como el salvador de Perú.

La oposición a Fujimori, ahora triunfante en las elecciones limpias, tienen una gran oportunidad de encarar los múltiples desafíos de Perú. La prioridad es restablecer la confianza pública en las instituciones estatales, consolidando el desmantelamiento de los mecanismos oficiales de corrupción que habían sido construidos por el régimen anterior. La solución encontrada en un gobierno de transición se ha visto reforzada por efectos de la alta legitimación del apoyo popular. Ello en gran parte por la forma radical como, en el contexto del Gobierno Provisional, el poder Judicial, la Procuraduría y las Comisiones Parlamentarias han enfrentado la insospechada dimensión que cobró la corrupción el Perú. El nuevo gobierno construido a partir de los escombros del terremoto político que durante 70 días sacudió al Perú desde sus bases, restauró la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral como vehículo para la renovación y el cambio después de una década de mala administración, abusos y corrupción. Aunque quedan aún muchos problemas que deben ser reconocidos y superados, sin embargo, el Perú cierra una etapa y se abre camino hacia una democracia abierta y pluralista.